EL MERCURIO

Fecha: 31/07/2025 Audiencia: 320.543 Sección: OPINION
Vpe: $3.618.004 Tirada: 126.654 Frecuencia: SEMANAL
Vpe pág: $20.570.976 Difusión: 126.654
Vpe portada: $20.570.976 Ocupación: 17,59%

Histórica "creación" de empleo

Uno de los principales errores económicos que toda política pública debe evitar es interferir y dañar el mercado laboral. Durante largo tiempo, nuestras dirigencias políticas han desafiado esa idea. Desde los cambios laborales implementados bajo la segunda administración Bachelet hasta la secuencia de equivocadas iniciativas aprobadas e implementadas en el actual gobierno, el empleo en Chile se ha encarecido de forma significativa. El impacto es evidente.

Desde luego, el alto nivel de desempleo no cede. La cifra oficial publicada ayer por el INE fue de 8,9% (abril-junio), similar a la del mes pasado, sumando 30 meses de desempleo por sobre el 8% a nivel nacional. Entre las mujeres, llegó a 9,9%, la decimoséptima cifra consecutiva por sobre el 9%. Así, por lo prolongado del fenómeno y frente a la ausencia de una crisis económica que lo explique, es necesario comenzar a aceptar que el desdén con que el mundo político ha modificado las reglas del mercado laboral local ha provocado un cambio estructural en este. Y es que el aumento en el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la Ley Karin, la estructura de la reforma de pensiones, entre otras, son todas modificaciones que profundizaron lo que economistas catalogan como una emergencia laboral no declarada. Es sorprendente que, a pesar de las alertas y críticas, ni el Ejecutivo ni el Congreso hayan tomado las precauciones para al menos compensar sus efectos.

La cifra de apenas 141 empleos creados en todo un año da cuenta de la crisis social que se fragua producto de equivocadas políticas.

Pero el desempleo no ha sido la única dimensión afectada por la seguidilla de errores de política. El análisis comparativo entre la última encuesta de empleo y la del mismo período del 2024 ilustra la profundidad y gravedad de la situación en materia de ocupación.

De acuerdo con las estimaciones del INE, durante el último año la población en edad de trabajar aumentó en 148.863 personas. Estas tenían dos opciones: entrar a la fuerza de trabajo (es decir, estaban dispuestas a trabajar) o declararse fuera de esta, al no tener intención de ocuparse. La gran mayoría se declaró inactiva, lo que incrementó la inactividad en 87.927 personas. El remanente ingresó a la fuerza laboral que, consecuentemente, solo aumentó en 60.936 personas en el último año.

Es necesario detenerse en esta última cifra. Excluyendo la pandemia, cuando la fuerza laboral cayó (un fenómeno extraordinario), la expansión registrada en el último año es una de las más bajas desde el inicio de la nueva encuesta del INE (2010) y se suma a una preocupante tendencia observada recientemente (desde octubre-diciembre de 2024, la fuerza laboral se expande anualmente en menos de 100 mil personas). Dicho fenómeno puede tener distintas razones, siendo una la percepción de que existen menos oportunidades laborales.

El estudio de lo que ocurre con aquellas 60.936 personas que sí entraron a la fuerza de trabajo parece validar dicha visión. En lo que es un hecho histórico, entre abril-junio de 2024 y el mismo trimestre de 2025, los desocupados crecieron en 60.795 personas, equivalente al 99,8% del crecimiento de la fuerza de trabajo. Así, el INE estima la creación anual de empleos en solo 141 personas —la diferencia entre 60.936 y 60.795—, una magnitud insignificante, que da cuenta de la crisis social que se fragua en el mercado del trabajo.

En este contexto, la siguiente administración no solo deberá hacerse cargo de holguras fiscales negativas, sino también de un mercado laboral literalmente estancado. Entonces, parece inevitable la urgente revisión de muchas de las iniciativas en este ámbito que se han impulsado desde la izquierda y que, en varias oportunidades, fueron aprobadas con los votos de parte de la oposición.

La situación demanda además un escrutinio público crítico y profundo de cualquier medida que pueda agudizar el daño infligido sobre el empleo y de todo argumento que lo relativice. El avance en la negociación ramal, la ideologización de la Dirección del Trabajo, el financiamiento de la educación superior con impuestos al empleo, nuevos aumentos en el salario mínimo o la instauración de uno "vital", como plantea la exministra (2022-2025) y hoy candidata presidencial, Jeannette Jara (bajo cuya gestión se incubó esta crisis), son ideas equivocadas que deben ser descartadas de plano.